

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A, frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en su contra GONZALO DE JESÚS AGUDELO PULGARIN en nombre propio y en representación de su menor hijo JOVANNY AGUDELO ARIAS.

ANTECEDENTES:

Luego de casar la sentencia del Tribunal, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, en sede de instancia, revocó la absolución de primer grado, y en su lugar condenó a Protección S.A a pagar a los demandantes una pensión de sobrevivientes en un 50% para cada uno. De esa forma, se impusieron las costas de ambas instancias a la administradora de pensiones del RAIS (fls 74 vto del Cuaderno del recurso de casación). Dictado el auto de cúmplase lo resuelto por el superior, esta dependencia fijó las agencias en derecho de la segunda instancia en \$1.755.606 (fl 241). Y el juzgado de primer grado, las fijó para ese nivel en \$8.778.030 que constituyen 10 SMLMV de 2020 (fl 242). Luego, se aprobó la liquidación de las costas al tenor del artículo 366 del CGP, en \$10.533.636 (fl 243 y 244). Discrepante de este monto, la convocada a juicio, interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación (véase fls. 245/246).

Negado el primero por estimarse infundados los reparos (fl. 247), fue concedido el segundo (fl 249), siendo esta la razón por la cual conoce del asunto esta Judicatura.

La censura busca que el monto de las agencias en derecho se disminuya al tope máximo de 4 SMLMV, dado que la obligación impuesta es una de hacer, conforme al Acuerdo 1887 de 2003.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

El numeral 4º del artículo 366 del C.G. del P., dispone:

*“3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, **además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales**, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.*

El Acuerdo N° 1887 del 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, aplicable al caso, al ocuparse de dicha materia en el proceso ordinario laboral, a favor del trabajador, en lo pertinente al caso, establece:

“Primera instancia.

“Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

“En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes ...

(...)

“PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Por prestación periódica puede entenderse aquella obligación que debe cancelarse en espacios regulares de tiempo, sin que para nada tenga que ver la condición de vitalicia o temporal.

La pensión de sobrevivientes, por antonomasia tiene esta característica, pues se causa por períodos mensuales y mientras subsistan las causas que generaron la prestación. Por ello, en los juicios en donde ella se discute, la tasación de agencias en derecho debe hacerse con base en las directrices que da el párrafo antes citado, es decir, hasta 20 SMLMV, y no hasta 4, como lo aduce erróneamente el recurrente, al comprender que en el asunto se debatió una obligación de hacer.

Ahora bien, a la luz de las normas citadas, en concordancia con la actuación desplegada por la apoderada de los demandantes, la cual consistió en la presentación de la demanda, la asistencia a la audiencia de conciliación, decisión

de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio y, posteriormente, a las de trámite y juzgamiento (fls. 1, 147, 149, 151, 154, y 171); la naturaleza del proceso (ordinario) y la duración del mismo (4 años en primera instancia); se estima que el monto fijado por la falladora de primer grado se ciñe a los lineamientos legales.

Y es que estudiando los referidos soportes, y al tratarse de una prestación periódica, en la que se reconoció por demás un retroactivo pensional de \$131.748.141 (fl. 74 Cuaderno del recurso de casación), se considera que estuvo bien que las plurialudidas costas procesales se tasaran en el monto antes descrito, que representan apenas 10 veces el SMLMV de 2020 (de los 20 SMLMV posibles), cuando el órgano de cierre impuso dicha obligación.

Así las cosas y por las razones que quedaron expuestas no queda otro camino que confirmar el auto recurrido, pues aparte que las costas se mantuvieron en los límites del Acuerdo que fijó sus montos, no se aprecian razones jurídicas ni fácticas para su disminución. Sin costas en la instancia.

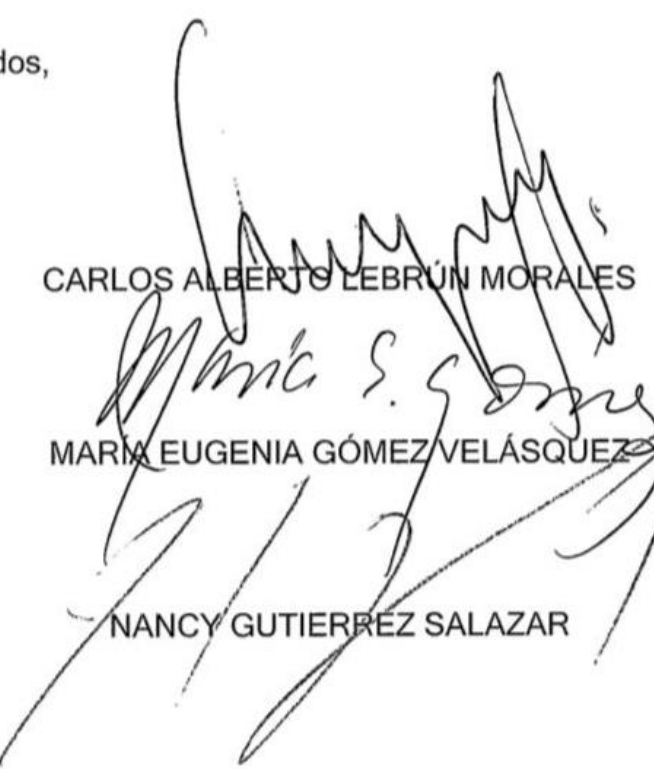
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, CONFIRMA el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 73 fijados el 30 de abril de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario